

Este artículo trata sobre dos problemáticas centrales que deben ser consideradas en aras de un proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tomando como ejemplo el caso del Caquetá que es sin duda la zona de mayor poder político y militar de esta organización armada. Las preguntas que se plantean son fruto del análisis de diversas entrevistas realizadas dentro del trabajo de campo iniciado recientemente para la investigación que estoy realizando, en compañía de la investigadora Graciela Uribe, sobre el tema de las FARC y los cultivos de coca en el Caquetá y que cuenta con el respaldo de la Universidad Javeriana y de Colciencias.

¿Qué hacer con los cultivos de coca en el Caquetá?

No existe todavía suficiente investigación agropecuaria, estudios de comercialización y menos aun experimentación con respecto a la sustitución del cultivo de la coca. La producción agropecuaria sostenible y rentable para la Amazonia es algo que todavía está por hacerse. Los intentos más exitosos de sustitución por caucho, cacao, frutales y otros productos, son todavía experiencias aisladas y de corto alcance en los que se destacan los de iniciativa de la Iglesia pero que aun requieren de mucha validación. De igual manera, la ganadería desarrollada en el departamento tiene enormes problemas y son muy pocos los ensayos en materia de ganadería sostenible. Hay haciendas ganaderas que han dejado los suelos inutilizables para la agricultura. Algunos hablan que más daño ha hecho el pasto braquiaria que la propia coca y que en la práctica sólo una porción muy pequeña del suelo amazónico (1%), está en condiciones de ser explotado en tareas agropecuarias.

Los programas desarrollados por Naciones Unidas y actualmente por el Plante han tenido muy poco impacto; su legitimidad ha sido cuestionada pues son programas paralelos a la política de fumigación que proviene del mismo Estado y tienen el problema de ser vistos como proyectos contrainsurgentes. Es muy difícil mantener el argumento de la precariedad del Estado como

justificación al abandono y marginalidad de estas zonas amazónicas cuando los campesinos ven un enorme despliegue de poderío, organización y recursos en las cerca de 12 de aeronaves entre avionetas, aviones y helicópteros que vuelan simultáneamente y fumigan en este momento sus cultivos. Según los miembros de la Comisión de Seguimiento de las Marchas Campesinas el costo de fumigar una hectárea es cercano a los 10 millones de pesos. Como ya se han fumigado cerca de 12.000 hectáreas el gasto es equivalente al costo del plan de desarrollo alternativo para el Caquetá. Es decir, el campesino ante esa acción se convence que cuando el Estado tiene voluntad política puede ser muy fuerte y decidido en sus empresas y por lo tanto si no ha sido eficiente en la política social no es porque no pueda.

El reciente ataque a la base antinarcóticos de Miraflores puede ser mirado como la repuesta que las FARC le está dando a las fumigaciones. Para la guerrilla impulsar una marcha como la de 1996 es hoy en día imposible. Fueron tantos los sufrimientos que padecieron durante esos 45 días que los colonos afirman que prefieren que la guerrilla los mate a tener que marchar de nuevo. En los medios de comunicación se afirma que las FARC con estos actos demuestran que defienden el narcotráfico. El argumento es por lo menos incompleto en la medida en que son muchos los pequeños colonos que ven esta acción militar como una defensa de sus intereses.

A través de algunas entrevistas hemos sabido del interés de las FARC por acabar con los cultivos de hoja de coca. Hoy en día, tienen el poder de las armas para obligar a los campesinos a abandonarlos. El problema es que siempre se ha pensado que la paz implica necesariamente la dejación de las armas. Esto conduce a pensar que este proceso de paz a la colombiana sería un proceso inédito en donde las guerrillas, en concreto las FARC, no dejarían las armas por lo menos durante el tiempo que lleve la reconversión socio-económica de las regiones bajo su influencia. No hay duda de que hay que pensar en forma original, lo cual incluye imaginar procesos de transición hacia la paz (que incluso pueden durar años), bajo la tutela de este grupo armado.

El problema social de los miles de colonos y sobretodo del ejército de raspachines puede ser enorme, pues la coca ha sido prácticamente el último refugio de los cosecheros de este país. Las fumigaciones hacen cada vez más difícil el proceso de recuperación de las tierras afectadas. Actualmente, dentro de la población juvenil, hay un aumento de solicitudes para entrar a la guerrilla sobretodo después de la euforia producida por los

*Politólogo, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana

triumfos militares de Las Delicias y El Billar. Qué ocupación darle a ese creciente grupo de jóvenes que en un eventual proceso de paz y de sustitución de cultivos se quedarían sin empleo, es uno de los grandes retos de la etapa de la paz. De igual manera, son muchos los comisionistas, guardaespaldas y pequeños comerciantes de coca que tendrían que cambiar de oficio. Existe ya una cultura económica de la coca que dificulta la vuelta a la agricultura tradicional. Los campesinos-colonos se acostumbraron a la cosecha corta, al transporte fácil, a la durabilidad del producto, al pago inmediato y en efectivo. Los riesgos provenientes del combate del Estado a este cultivo, si bien son un problema, también son una oportunidad de mejores precios.

Actualmente la guerrilla no administra directamente los cultivos de coca o las pistas de aterrizaje pero sí siguen cobrando un impuesto a los narcotraficantes. Una oposición de las FARC al cultivo de la coca desataría un enfrenamiento de no pocas proporciones con los narcos, en donde de nuevo la guerrilla tendría que contar con las armas para imponerse.

Del lado de las propuestas está, inicialmente, el proyecto de las Reservas Campesinas que recientemente se inicia con el crédito del Banco Mundial para la zona del Pato. Es una iniciativa interesante que abre posibilidades para enfrentar varios problemas, entre ellos, el de los cultivos ilícitos. A través de la reagrupación de la población colona dentro de un territorio, que cuente con potencial productivo y con una infraestructura de servicios y sobre todo de comunicaciones más apropiada, se pretende el desarrollo de economías campesinas legales e integradas al mercado, y frenar así la expansión de la frontera agrícola y el deterioro del medio ambiente. Esta propuesta cuenta con el apoyo de las FARC y su desarrollo formaría parte de las negociaciones de paz en el ámbito del futuro desarrollo rural del Caquetá. Uno de sus inconvenientes es el costo, pues sólo para la región del Pato se destinaron cerca de 2 millones de dólares y esto apenas cubre a cerca de 70 familias. Esperamos que las gestiones de nuestro nuevo presidente en materia de consecución de recursos para la paz y la sustitución de cultivos ilícitos vayan en la dirección de apoyar este tipo de iniciativas.

Existen también propuestas de desarrollo rural alternativo interesantes como las de la Vicaría del Sur en compañía de la Asociación de Comuneros del Sur, Asocosur; y del Vicariato de San Vicente y Puerto Leguizamo a través del Centro de Investigación, Formación e Información para el Servicio Amazónico,

Cifisam. Estas propuestas tienen la virtud de involucrar

Las dimensiones ambiental, económica, social, cultural, política y técnica propias de la complejidad y las múltiples internaciones que plantea la vida y el sistema de producción amazónico. Otras de sus fortalezas son la constancia (más de diez años en medio de un ambiente muy adverso producido por la cultura de la coca y la violencia de distintos tipos), y el permanente ajuste de la propuesta misma. Sus limitaciones hasta el momento son de recursos, de cobertura y de capacidad para el desarrollo de la investigación en el área técnica y de comercialización. Estas iniciativas que han sido seguidas por las FARC con cierta curiosidad y respeto, deben ser recogidas en la actual coyuntura para no pretender que se parte de cero en la experiencia sobre propuestas novedosas de desarrollo para el Caquetá.

¿Qué hacer con la democracia local?

Las FARC está desarrollando su propio concepto de democracia y de sistema electoral. No es la democracia liberal y el sistema de elecciones que encontramos en nuestra Constitución. En las últimas semanas esta agrupación viene patrocinando la elección de nuevos alcaldes populares en varios municipios del Caquetá que se mantienen en la sombra mientras aparece el momento indicado para su posesión. En uno de los municipios del sur, y a manera de ejemplo, el procedimiento consistió en ordenar a todos los habitantes de las veredas inscribirse en las Juntas de Acción Comunal respectivas y elegir directivas. Tales directivas fueron "invitadas" a una reunión que recogía a todo el municipio incluyendo el alcalde, el Concejo Municipal (elegidos en octubre del año pasado) y a algunos representantes del comercio. Entre los puntos principales de la agenda estaba discutir el plan de desarrollo presentado por el alcalde actual y hacerle los cambios y sugerencias respectivas. Igualmente, se eligió un nuevo alcalde y un nuevo Concejo mediante el sistema de escoger una de dos planchas propuestas. En Cartagena del Chairá el proceso de elección patrocinado por las FARC ha tenido algunas

Diferencias, en la medida en que el alcalde elegido en octubre fue forzado a renunciar y en agosto del presente año se eligió nuevo alcalde dentro de un proceso semejante al descrito anteriormente y, por lo tanto, el proceso de elección que se adelanta en este momento es para ocupar una vacante.

Aquí los interrogantes son sobre los alcances que esta práctica tiene hacia el futuro. ¿Se trata de una estrategia propia de la clandestinidad o es ya el embrión del tipo de régimen político-electoral que las FARC quisieran para sus zonas de influencia?

Si aceptamos que lo segundo es cierto habría varios problemas con este sistema de elección. Primero, aquí el sufragio universal es indirecto y por lo tanto menos democrático pues son los directivos de las juntas los que eligen a los alcaldes. Es claro que para las FARC es más fácil influir sobre un pequeño grupo de directivos que sobre toda la población. Se sabe que el sistema de listas cerradas agrava las desigualdades de representación pues al no haber proporcionalidad la lista perdedora de la minoría no gana un solo escaño así tenga el 40% de los votos. Hay, adicionalmente, otra desigualdad en la representación, pues las juntas tienen un número desigual de miembros y cada una está eligiendo el mismo número de delegados. Aunque la población rural es mayoritaria en la mayoría de los municipios del departamento queda sobrerrepresentada con relación a la población de los cascos urbanos. Además, existen unas pautas no escritas pero sí divulgadas por las FARC que sugieren que los posibles alcaldes no deben tener vínculo con los partidos políticos tradicionales y no deben haber ocupado puestos en la administración. Estas condiciones obviamente se traducen en candidatos a la alcaldía con una hoja de vida intachable pero sin el nivel educativo adecuado y sin experiencia administrativa.

Lo que puede ser más significativo de este proceso es que deja traslucir la posibilidad de que las FARC no acepten el pluripartidismo, sin que se pueda vislumbrar cuál sería su propia organización política. Sabemos que el intento de crear un Movimiento Bolivariano ha sido hasta ahora un fracaso, pues en este momento nadie quiere repetir la experiencia mortal de la Unión Patriótica y menos aun con la reciente entrada del paramilitarismo al Caquetá. Esto podría significar que las FARC llegarían a la paz sin un movimiento o partido político con algún desarrollo. No estaría entonces claro si serían los milicianos y los guerrilleros mismos los que conformarían el grupo grueso de militantes, pues siendo así éste tendría características propias de un partido facista. Estamos enfrente, entonces, de una elección popular, pero no muy democrática. Y este es, tal vez, un problema mayor para los agentes externos (para nosotros), que para la mayoría de la población involucrada. Ésta, en

líneas generales, ve con buenos ojos que a toda la gente se le obligue a participar y considera saludable que las FARC controlen el proceso para que no se introduzcan elementos "perversos" propios del sistema electoral tradicional. Se trata de un autoritarismo popular que las FARC se han encargado de representar y desarrollar en sus 25 años de presencia en el departamento.

En la esfera de la justicia es aun más abierta esta actitud autoritaria. Según la Cruz Roja Internacional las propias FARC confesaron haber matado a varios Coreguajes durante el segundo semestre del año pasado. La justificación fue que estas personas ya estaban avisadas y que las FARC no podían tolerar la creación de bandas de atracadores y de asesinos por parte de los indígenas. Lo grave aquí, ante un hecho que se ha repetido de otras maneras, es la complacencia que existe por parte de la mayoría de la población que considera que así se hace justicia y se logra escarmentar a los potenciales ladrones. Eso sin contar las consecuencias políticas y culturales que trae para las comunidades indígenas que sean agentes externos los que resuelvan sus problemas de justicia. En el Caquetá, las FARC han aclimatado la cultura del ojo por ojo diente por diente para los que se aprovechan abusivamente del trabajo de los demás y ésto no deja de ser un gran desafío para el tipo de justicia que se implante en la nueva sociedad resultante de los posibles acuerdos de paz.

Esta concepción representa un gran desconsuelo para las pocas pero constantes ONG's de desarrollo comunitario que llevan muchos años trabajando por inculcar en la gente los valores propios de una cultura democrática que niegue el autoritarismo incluso cuando éste es utilizado en beneficio de los intereses populares. Sin embargo, habría que reconocer que, para el caso de estas atípicas elecciones, es mejor que los grupos insurgentes estén participando en procesos político-electorales a que se dediquen exclusivamente a la guerra.

En conclusión, no son de poca monta los desafíos que se plantean en el departamento del Caquetá en aras de una negociación con la guerrilla. Lo interesante es mirar que mucho de estos escollos no son sólo un problema de esta región sino que involucran muchos de los territorios ocupados por las FARC en el país e incluso por el propio ELN. Nuestro compromiso académico, dentro de una investigación que apenas se inicia, es contextualizar históricamente este proceso y hacerle un seguimiento crítico a su evolución.